
INFORME TÉCNICO

Análisis político de la Encuesta CEP N°96, abril-mayo 2026

Elaborado por Pablo Ortiz Muñoz
Investigador CDC

Resumen

La Encuesta CEP N°96, aplicada entre abril y mayo de 2026, muestra una opinión pública marcada por inseguridad, desconfianza institucional, incertidumbre económica y una alta exigencia de eficacia estatal. El principal hallazgo es la consolidación de la delincuencia como primera prioridad ciudadana, con 57% de menciones, seguida por salud, con 42%; educación, con 28%; y narcotráfico, también con 28%. Este patrón confirma una agenda pública fuertemente securitizada, en la que la capacidad del gobierno para producir resultados visibles en seguridad será decisiva para su legitimidad.

En el plano económico, predomina una percepción de estancamiento. Un 45% califica la situación económica del país como mala o muy mala, frente a solo 11% que la evalúa positivamente. Sin embargo, la situación personal aparece menos deteriorada: 54% la considera regular y 25% buena o muy buena. Esta brecha sugiere que el malestar opera más como juicio sobre la conducción nacional que como deterioro homogéneo de la experiencia individual.

Políticamente, el dato central es la persistencia de una crisis de representación. Aunque 54% declara que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, solo 21% cree que funciona bien o muy bien. A ello se suma la baja confianza en los partidos políticos, con 6%, y en el Congreso, con 13%, en contraste con mayores niveles de confianza en instituciones de seguridad. La ciudadanía mantiene una adhesión general a la democracia, pero exige orden, resultados y capacidad estatal.

La identificación partidaria específica confirma un escenario de fuerte fragmentación y bajo anclaje social de los partidos. La categoría “ninguno” alcanza 52% y constituye el dato dominante de la medición. Entre las colectividades con mayor nivel de identificación aparecen el Partido Socialista y el Partido de la Gente, ambos con 7%, seguidos por el Partido Republicano y la **Democracia Cristiana**¹, ambos con 6%. En un segundo nivel se ubican el Partido Comunista y Renovación Nacional, cada uno con 4%, mientras que el Frente Amplio y el Partido Nacional Libertario alcanzan 3% cada uno. En términos políticos, que ninguna colectividad supere el 7% evidencia una baja institucionalización partidaria, alta disponibilidad electoral y creciente dependencia de liderazgos personales, coyunturas temáticas y percepciones de eficacia gubernamental.

El gobierno de José Antonio Kast enfrenta un escenario exigente: 34% aprueba su gestión y 52% la desapruueba. Además, 67% tiene poca o ninguna confianza en que cumplirá sus promesas de campaña. Este dato adquiere mayor relevancia porque 66% prefiere líderes que privilegien acuerdos, mientras 51% cree que el Presidente no tiene disposición suficiente para acordar con la oposición.

La inmigración aparece como un clivaje político emergente. Un 55% se ubica en posiciones restrictivas, 67% asocia inmigración con aumento de criminalidad y 60% cree que el gobierno gasta demasiado dinero ayudando a inmigrantes. No obstante, 71% respalda igualdad de acceso a educación pública

¹ Diferencia estadísticamente significativa al 5% entre las mediciones de mayo-junio 2025 y abril-mayo 2026.

para inmigrantes legales, lo que indica una demanda de control, legalidad y selectividad, más que un rechazo absoluto.

Hacia el futuro próximo, los principales aspectos a observar son cinco: la evolución de la seguridad como eje de evaluación gubernamental; la capacidad del Ejecutivo para construir acuerdos; el manejo de la agenda fiscal sin afectar programas socialmente sensibles; la consolidación de la inmigración como tema electoral; y la persistente debilidad de los partidos como vehículos de representación. En síntesis, la encuesta describe un país políticamente disponible, crítico de sus instituciones, demandante de orden y atento a liderazgos capaces de ofrecer eficacia, protección y gobernabilidad.

1. Antecedentes metodológicos

La Encuesta CEP N°96 corresponde a un estudio nacional de opinión pública aplicado mediante entrevistas cara a cara en hogares. La población objetivo corresponde a personas de 18 años y más residentes en Chile, excluyendo zonas de difícil acceso. El diseño muestral fue probabilístico, estratificado por región y zona urbana-rural, con selección aleatoria en tres etapas: manzana, hogar y entrevistado.

La muestra total fue de 1.469 personas entrevistadas en 122 comunas del país. El error muestral se estima en $\pm 2,8\%$, considerando varianza máxima, nivel de confianza de 95% y efecto de diseño de 1,2. La tasa de respuesta fue de 62,2%, correspondiente a las encuestas completas sobre una muestra total de 2.360 casos.

El trabajo de campo se realizó entre el 18 de abril y el 27 de mayo de 2026. Durante ese período ocurrieron hechos relevantes que deben ser considerados para la interpretación política de los resultados, entre ellos la discusión de la denominada megarreforma impulsada por el gobierno, cifras negativas de actividad económica, aumento del IPC, cambio de gabinete, controversias migratorias, debate fiscal y cuestionamientos asociados a la deuda pública.

2. Principales problemas públicos identificados por la ciudadanía

La pregunta sobre los tres problemas a los que el gobierno debería dedicar mayor esfuerzo permite identificar la jerarquía subjetiva de prioridades ciudadanas. El problema más mencionado es la delincuencia con un 57%. En segundo lugar, aparece salud, con un 42%. Luego se ubican educación y narcotráfico, ambos con 28%. Más atrás aparecen pensiones con 18%, empleo con 18%, pobreza con 16%, corrupción con 14%, inmigración con 13%, sueldos con 13%, violencia con 12%, vivienda con 11%, desigualdad con 9%, inflación con 7%, transporte público con 5%, medio ambiente con 5% y derechos humanos con 3%.

La distribución de respuestas confirma que la seguridad pública se mantiene como el eje dominante de la agenda nacional. La delincuencia no solo lidera las menciones, sino que además se complementa con el narcotráfico, la inmigración irregular, la percepción de impunidad y el bajo nivel de confianza en las instituciones de justicia penal. Este patrón puede interpretarse como un proceso de securitización de la opinión pública, en el cual problemas sociales, territoriales y migratorios son leídos crecientemente bajo el marco del orden público.

El segundo elemento relevante es que las demandas sociales tradicionales no desaparecen. Salud, educación, pensiones, empleo y pobreza siguen ocupando posiciones significativas. Sin embargo, su centralidad aparece subordinada a la demanda de seguridad. Esto sugiere una reconfiguración de la agenda pública: el malestar social ya no se expresa principalmente como demanda redistributiva, sino como exigencia de protección, control y capacidad estatal efectiva.

3. Evaluación económica: pesimismo nacional y moderación personal

La evaluación de la situación económica del país es predominantemente negativa. Un 45% la califica como mala o muy mala, un 43% como ni buena ni mala y solo un 11% como buena o muy buena. Esta distribución muestra una percepción macroeconómica deteriorada, aunque no completamente catastrófica. El dato más relevante es la baja proporción de evaluaciones positivas, lo que indica ausencia de confianza robusta en el desempeño económico general.

Respecto de las expectativas para los próximos 12 meses, las respuestas se distribuyen de manera relativamente equilibrada: un 32% cree que la situación económica del país mejorará, un 33% estima que no cambiará y un 31% considera que empeorará. Este empate estadístico entre optimismo, continuidad y pesimismo expresa incertidumbre económica. No existe una expectativa dominante de recuperación ni una percepción consolidada de deterioro inevitable.

La evaluación de la situación económica personal es menos negativa que la evaluación del país. Un 21% la califica como mala o muy mala, un 54% como ni buena ni mala y un 25% como buena o muy buena. Asimismo, al proyectar la situación personal a los próximos 12 meses, un 38% cree que estará mejor o mucho mejor, un 48% considera que estará igual y solo un 12% piensa que estará peor o mucho peor.

Esta diferencia entre evaluación nacional y evaluación personal es políticamente relevante. La ciudadanía percibe que el país atraviesa dificultades, pero no necesariamente experimenta esas dificultades con la misma intensidad en el plano individual. En ciencia política y comportamiento electoral, esta diferencia remite a la distinción entre juicio referido al país y la situación personal. La opinión pública parece castigar el desempeño económico agregado, aunque mantiene cierta expectativa de estabilidad individual.

Finalmente, ante la pregunta sobre si Chile está progresando, estancado o en decadencia, el 54% considera que el país está estancado, el 26% cree que está en decadencia y solo el 18% estima que está progresando. El dato central no es la decadencia, sino la percepción de estancamiento. Esto revela una sensación de bloqueo estructural: la ciudadanía no necesariamente percibe colapso, pero sí ausencia de avance.

4. Confianza institucional y crisis de representación

La encuesta muestra una estructura de confianza institucional fuertemente diferenciada. Las instituciones con mayor confianza son la PDI, con 63%; las universidades, con 61%; Carabineros, con 58%; las Fuerzas Armadas, con 57%; y las radios, con 50%. En contraste, las instituciones representativas presentan niveles muy bajos: el Congreso alcanza 13% y los partidos políticos apenas 6%.

Este patrón confirma una crisis severa de representación política. La ciudadanía desconfía de los actores e instituciones encargados de procesar la competencia política, producir acuerdos legislativos y articular intereses sociales. Sin embargo, no se observa una desconfianza homogénea hacia toda forma de autoridad institucional. Por el contrario, las instituciones asociadas a seguridad, jerarquía, investigación, conocimiento técnico y proximidad funcional presentan niveles superiores de confianza.

La baja confianza en el sistema de justicia también es significativa. Los tribunales de justicia alcanzan 24% y el Ministerio Público 22%. En un contexto donde la delincuencia es la principal preocupación ciudadana, estos niveles de confianza erosionan la legitimidad del sistema de persecución penal y refuerzan la percepción de impunidad.

La confianza en las municipalidades llega a 34%, ubicándose en una posición intermedia-baja. Dado que los municipios son actores centrales en la gestión territorial de la seguridad, la prevención situacional y la provisión de servicios locales, este nivel de confianza sugiere una oportunidad y a la vez una limitación. Las municipalidades pueden ser percibidas como instituciones más cercanas que el Congreso o los partidos, pero todavía no cuentan con un capital de confianza suficiente para liderar por sí solas respuestas integrales frente al delito y la inseguridad.

Desde el punto de vista del sistema político, la estructura de confianza revela una democracia con baja legitimidad representativa, pero con demanda de autoridad operativa. La ciudadanía no parece rechazar la institucionalidad en abstracto, sino sancionar a aquellas instituciones que percibe como ineficaces, capturadas por intereses partidarios o incapaces de resolver problemas concretos.

5. Democracia, legitimidad y gobernabilidad

La evaluación de la situación política del país es negativa. Un 52% la califica como mala o muy mala, un 34% como ni buena ni mala y solo un 12% como buena o muy buena. Aunque la evaluación negativa muestra una disminución respecto de mediciones anteriores, sigue siendo mayoritaria. Esto indica que la ciudadanía percibe una mejora relativa, pero no una normalización del sistema político.

En cuanto al funcionamiento de la democracia, un 21% considera que funciona bien o muy bien, un 50% la evalúa como regular y un 27% como mal o muy mal. Este resultado sugiere que la democracia chilena no es percibida como plenamente fallida, pero tampoco como eficaz. La categoría “regular” funciona como un indicador de legitimidad intermedia: la ciudadanía no rompe con el régimen democrático, pero expresa insatisfacción con su rendimiento.

La pregunta sobre preferencia de régimen confirma esta tensión. Un 54% sostiene que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno; un 15% considera que en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible; y un 28% declara que a personas como uno les da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario. Este último dato es especialmente relevante. La indiferencia democrática representa un riesgo mayor que el apoyo autoritario explícito, porque expresa desvinculación normativa respecto del régimen.

Al mismo tiempo, el 66% prefiere líderes políticos que privilegien los acuerdos, aunque tengan que ceder posiciones, mientras un 28% prefiere líderes que defiendan sus posiciones, aunque eso implique no llegar a acuerdos. Esta demanda de acuerdos contrasta con la percepción sobre el Presidente José Antonio Kast: un 51% cree que no tiene disposición a escuchar y llegar a acuerdos con la oposición, mientras un 44% cree que sí la tiene.

La gobernabilidad aparece así tensionada por una brecha entre demanda ciudadana y percepción de liderazgo. La ciudadanía quiere acuerdos, pero no percibe con claridad que el Presidente posea una disposición suficiente para construirlos. En un sistema institucional fragmentado, con bajo respaldo partidario y alta conflictividad legislativa, esta percepción puede transformarse en un problema de viabilidad política para la agenda gubernamental.

6. Evaluación del gobierno y liderazgo presidencial

La aprobación del gobierno del Presidente José Antonio Kast alcanza un 34%, mientras la desaprobación llega al 52%. Un 9% no aprueba ni desaprueba y un 5% no sabe o no contesta. Se trata de un saldo neto negativo de 18 puntos, lo que muestra una posición inicial políticamente débil.

Además, la confianza en que el Presidente cumplirá sus promesas de campaña es baja. Un 28% declara no tener nada de confianza, un 39% poca confianza, un 21% bastante confianza y un 10% mucha confianza. En términos agregados, el 67% expresa poca o ninguna confianza, frente a un 31% que expresa bastante o mucha confianza.

Este dato debe ser interpretado como un problema de credibilidad programática. No solo existe desaprobación del desempeño gubernamental, sino también dudas sobre la capacidad o disposición del Presidente para cumplir su oferta electoral. En un gobierno que inicia su mandato con una agenda intensa de reformas, este déficit de confianza puede debilitar la capacidad de movilizar apoyo social para políticas complejas o fiscalmente costosas.

La evaluación retrospectiva del gobierno de Gabriel Boric también es negativa: 33% aprueba, 58% desaprueba y 7% no aprueba ni desaprueba. Esto indica que el cambio de gobierno no se tradujo automáticamente en un cierre del ciclo de malestar. La ciudadanía mantiene una evaluación crítica tanto del gobierno anterior como del actual, lo que sugiere una insatisfacción más estructural con la conducción política del país.

7. Estado, mercado y política fiscal

La encuesta muestra una opinión pública compleja respecto del rol del Estado. En una escala donde 1 representa que la principal responsabilidad por el sustento económico está en el Estado y 10 que está en las personas mismas, un 26% se ubica entre 1 y 4, un 33% entre 5 y 6 y un 40% entre 7 y 10. Esto indica una inclinación relativa hacia la responsabilidad individual, pero no una hegemonía antiestatal.

De hecho, cuando se consulta por la frase “este país estará mejor mientras menos participe el Estado en la economía”, el 48% está en desacuerdo o muy en desacuerdo, mientras solo un 24% está de acuerdo o muy de acuerdo. Sin embargo, frente a la afirmación “la intervención del Estado lleva a demasiada burocracia y muchos problemas”, el 52% está de acuerdo o muy de acuerdo.

Estos resultados revelan una distinción importante: la ciudadanía no rechaza necesariamente la presencia del Estado, pero sí cuestiona su eficiencia, burocracia y calidad de gestión. La demanda no apunta a un Estado mínimo, sino a un Estado eficaz, austero en su administración, capaz de proteger y menos capturado por inercias burocráticas.

En materia fiscal, el 54% considera que el nivel de deuda pública es muy grave o bastante grave, mientras un 26% lo estima levemente grave o nada grave y un 18% declara no estar informado. La existencia de un segmento importante que no se siente informado obliga a interpretar con cautela la intensidad de la opinión fiscal, aunque la preocupación mayoritaria por la deuda es clara.

Respecto de la estrategia gubernamental de reducir el gasto público para mejorar las finanzas públicas, un 34% está de acuerdo o muy de acuerdo, un 21% se ubica en posición neutral y un 41% está en desacuerdo o muy en desacuerdo. No existe, por tanto, un mandato ciudadano robusto para una política de austeridad generalizada.

Cuando se pregunta por medidas prioritarias para mejorar las finanzas públicas, el 83% menciona reducir el gasto en la administración del Estado. Muy por debajo aparecen aumentar impuestos, con 32%; reducir el gasto en programas sociales, con 28%; reducir inversión pública en infraestructura, con 27%; ninguna, con 17%; y no sabe/no contesta, con 13%. La ciudadanía prefiere recortar burocracia antes que afectar programas sociales o inversión.

Finalmente, ante el alza de combustibles, el 49% se ubica en el polo que considera que el gobierno debería hacer mayores esfuerzos para contener los precios, aunque ello deteriore las finanzas públicas. Solo un 17% se ubica en el polo de restricción fiscal estricta. Esto confirma una tensión entre preocupación por la deuda y demanda de protección material frente al costo de vida.

8. Inmigración y nuevo clivaje político

La inmigración aparece como una dimensión central del clima de opinión pública. En la escala sobre política migratoria, donde 1 significa prohibir toda inmigración y 10 permitir libremente toda inmigración, el 55% se ubica entre 1 y 4, el 30% entre 5 y 6, y solo el 14% entre 7 y 10. Esto indica una preferencia mayoritaria por políticas restrictivas o de mayor control.

El 67% está de acuerdo o muy de acuerdo con que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad, mientras solo el 15% está en desacuerdo o muy en desacuerdo. Este es uno de los datos políticamente más sensibles de la encuesta, porque muestra la consolidación de una asociación subjetiva entre inmigración y delito. Más allá de la evidencia empírica disponible, esta percepción ya tiene efectos políticos concretos, en la medida en que condiciona preferencias, discursos y expectativas de política pública.

Respecto de la afirmación “los inmigrantes les quitan los trabajos a las personas nacidas en Chile”, la opinión está dividida: 40% está de acuerdo, 21% se mantiene neutral y 38% está en desacuerdo. Esto muestra que la amenaza laboral no tiene la misma intensidad que la amenaza criminal.

El 60% está de acuerdo con que el gobierno gasta demasiado dinero ayudando a los inmigrantes. Este resultado muestra que la inmigración también se interpreta bajo una lógica de competencia y acceso a beneficios públicos. En contextos de estrechez económica, endeudamiento familiar y presión sobre servicios sociales, esta percepción puede fortalecer discursos de priorización nacional.

Sin embargo, el rechazo no es homogéneo. El 71% está de acuerdo con que los inmigrantes legales debieran tener el mismo acceso a la educación pública que los ciudadanos chilenos. Además, un 58% apoya que la inmigración sea selectiva, favoreciendo a las personas más educadas. Esto indica que la ciudadanía distingue entre inmigración legal e irregular, y entre apertura indiscriminada y apertura selectiva.

Desde el punto de vista político, la inmigración se consolida como un clivaje emergente que articula seguridad, identidad nacional y capacidad estatal. No reemplaza al eje izquierda-derecha, pero lo reconfigura y tensiona.

9. Seguridad, libertades y protesta social

La encuesta muestra una fuerte demanda de orden. En la escala que contrapone garantías de libertades públicas y privadas con control de la delincuencia, un 42% se ubica en el tramo 7 a 10, cercano a la idea de suprimir libertades para controlar la delincuencia. Un 43% se ubica en el centro y solo un 13% se ubica en el tramo 0 a 3, más cercano a garantizar libertades, aunque ello dificulte controlar la delincuencia.

Este resultado es uno de los indicadores más relevantes del giro hacia la seguridad de la opinión pública. No implica necesariamente adhesión autoritaria, pero sí una disposición significativa a aceptar restricciones de libertades en nombre de la seguridad. En términos democráticos, constituye una zona de riesgo, porque puede abrir espacio para políticas de excepción, expansión de facultades policiales o debilitamiento de garantías si no existe control institucional suficiente.

Respecto de las causas de la delincuencia, las menciones principales son la falta de condenas o bajas penas, con 55%; el consumo de drogas y alcohol, con 44%; las bandas de narcotráfico, con 43%; la inmigración irregular, con 41%; y la pobreza o falta de oportunidades, con 34%. La ciudadanía combina explicaciones punitivas, criminológicas, sociales y migratorias. Sin embargo, la primera causa identificada corresponde a un diagnóstico de impunidad, lo que refuerza la presión por endurecimiento penal.

La legitimidad de la protesta social aparece fuertemente diferenciada según el tipo de acción. Participar en una marcha es justificado siempre o casi siempre por 35%, a veces por 26% y nunca o casi nunca por 39%. En cambio, evadir el transporte público como protesta es rechazado por 73%; barricadas o destrozos son rechazados por 90%; saqueos por 96%; incendios por 96%; ocupación de terrenos privados, fábricas u oficinas por 85%; y tomas de colegios o universidades por 76%.

Estos datos muestran una fuerte deslegitimación de repertorios disruptivos de protesta. El ciclo posterior al estallido social parece haber consolidado una preferencia por formas institucionales o pacíficas de expresión, junto con un rechazo casi transversal a la violencia, los daños y las tomas.

En cuanto al uso de la fuerza por parte de Carabineros, la opinión es más matizada. El uso de gases lacrimógenos es justificado siempre o casi siempre por 30%, a veces por 30% y nunca o casi nunca por 39%. El uso de fuerza contra manifestantes violentos es justificado siempre o casi siempre por 47%, a veces por 29% y nunca o casi nunca por 24%. En cambio, el disparo de balines de goma es rechazado por el 50%. La ciudadanía parece aceptar el uso de la fuerza cuando existe violencia, pero mantiene límites frente a medios especialmente lesivos.

10. Conflictos sociales y percepción de polarización

La encuesta permite identificar los conflictos sociales percibidos como más intensos. El conflicto entre personas de derecha y de izquierda es considerado muy fuerte por 50% y fuerte por 36%. Es decir, un 86% lo percibe como fuerte o muy fuerte. Esto confirma que el eje ideológico mantiene alta visibilidad social.

El conflicto entre chilenos e inmigrantes también es elevado: 39% lo considera muy fuerte y 40% fuerte. En conjunto, 79% lo percibe como fuerte o muy fuerte. Este resultado confirma que la inmigración se ha instalado como una fractura social significativa.

El conflicto entre gente pobre y gente rica es considerado muy fuerte por 31% y fuerte por 40%, acumulando 71%. El conflicto entre empresarios y trabajadores alcanza 62% entre muy fuerte y fuerte. El conflicto entre hombres y mujeres suma 47% entre muy fuerte y fuerte, y el conflicto entre jóvenes y adultos mayores alcanza 38%.

Estos datos muestran que la sociedad chilena percibe múltiples líneas de conflicto, pero las más intensas son actualmente la polarización ideológica, la tensión migratoria y la desigualdad socioeconómica. La estructura del conflicto social no se reduce a una sola dimensión. Más bien, existe una superposición de clivajes ideológicos, identitarios, distributivos y generacionales.

11. Endeudamiento, ingresos y vulnerabilidad económica subjetiva

La preocupación por pagar deudas es muy alta. En una escala de 0 a 10, el 73% se ubica entre 7 y 10, es decir, en niveles altos de preocupación. Solo el 13% se ubica entre 0 y 3. Este resultado revela una presión financiera significativa sobre los hogares.

Respecto de los ingresos familiares, el 13% declara que les alcanza bien y pueden ahorrar; el 50% señala que les alcanza justo, sin grandes dificultades; el 29% afirma que no les alcanza y tienen algunas dificultades; y el 8% declara que no les alcanza y tienen grandes dificultades. En conjunto, un 37% expresa insuficiencia de ingresos con dificultades, mientras la mitad del país vive en equilibrio estrecho, sin capacidad de ahorro significativa.

Estos datos son importantes porque contextualizan la opinión pública sobre gasto fiscal, combustibles, programas sociales e inmigración. La ciudadanía no evalúa la política fiscal desde una posición abstracta, sino desde una experiencia cotidiana marcada por deuda, ingresos ajustados y baja holgura económica.

12. Familia, natalidad y cambio cultural

Los resultados sobre natalidad muestran una brecha entre hijos tenidos e hijos deseados. El promedio de hijos tenidos es 1,7, mientras el promedio de hijos deseados es 2,4. Esta diferencia sugiere que la baja natalidad no responde exclusivamente a una menor valoración de la parentalidad, sino también a restricciones económicas, laborales, de salud, edad, pareja y expectativas de futuro.

Entre quienes no tienen hijos, la principal razón para no tenerlos es que los niños son caros de mantener, con 25%. Luego aparecen la preocupación por la situación mundial, con 15%; la idea de que criar hijos implica muchas preocupaciones, con 14%; no estar casado o no tener pareja estable, con 13%; y razones de salud o edad, con 12%.

Entre quienes ya tienen hijos, la principal razón para no tener más también es económica: 29% señala que los niños son caros de mantener. Luego aparecen salud o edad, con 22%; preocupación por la situación mundial, con 11%; dificultad para que la mujer trabaje, con 11%; y preocupaciones asociadas a la crianza, con 9%.

Al mismo tiempo, existe una alta valoración simbólica de los hijos: 86% está de acuerdo con que ver crecer a los hijos es la satisfacción más grande de la vida. Sin embargo, también hay amplio respaldo a la autonomía reproductiva: 86% está de acuerdo con que una mujer decida no tener hijos y 81% con que un hombre decida no tenerlos.

Estos datos reflejan una sociedad que sigue valorando la familia y la parentalidad, pero que ha incorporado fuertemente la autonomía individual y el cálculo económico en las decisiones reproductivas. La parentalidad ya no aparece como obligación social universal, sino como una opción condicionada por recursos, proyectos personales y expectativas de estabilidad.

13. Interés político, información e identificación partidaria

El interés en la política es bajo. Solo 19% declara estar muy o bastante interesado, 23% algo interesado y 58% no muy o nada interesado. Esta baja disposición subjetiva hacia la política convive, paradójicamente, con una alta exposición al conflicto político. La ciudadanía percibe polarización, evalúa autoridades y expresa posiciones sobre democracia, seguridad, migración y Estado, pero no necesariamente se reconoce como políticamente interesada.

Las principales fuentes de información política son la televisión, con 36%, y las redes sociales, con 33%. Luego aparecen radio y podcast, con 10%; sitios web de noticias, con 8%; ninguna fuente, con 7%; y diarios impresos u online, con 4%. Esto confirma un ecosistema informativo híbrido, donde televisión y plataformas digitales compiten como fuentes principales de intermediación política.

En cuanto a autoidentificación ideológica, el 21% se ubica en la izquierda, el 41% en el centro, el 22% en la derecha y el 16% no sabe o no contesta. El centro conserva relevancia, aunque no necesariamente como identidad partidaria, sino como posición de moderación, ambivalencia o distancia frente a los polos.

La identificación partidaria específica es débil. El 52% declara no identificarse con ningún partido. Entre quienes sí expresan simpatía, ningún partido supera el 7%. El Partido Socialista y el Partido de la Gente alcanzan 7% cada uno; el Partido Republicano y la Democracia Cristiana llegan a 6%; el Partido Comunista y Renovación Nacional alcanzan 4% cada uno; y el Frente Amplio y el Partido Nacional Libertario registran 3% cada uno.

Este patrón expresa fragmentación y baja institucionalización partidaria. La competencia política depende crecientemente de liderazgos personales, coyunturas comunicacionales y agendas temáticas, más que de lealtades partidarias estables.

14. Evaluación de liderazgos políticos

La encuesta muestra diferencias relevantes en conocimiento y evaluación de figuras políticas. José Antonio Kast y Gabriel Boric alcanzan niveles de conocimiento cercanos al 97%, lo que refleja su centralidad en la competencia política reciente. Jeannette Jara alcanza 91%, Franco Parisi 87% y Johannes Kaiser 78%. Otros liderazgos como Claudio Orrego y Tomás Vodanovic presentan niveles de conocimiento menores, pero evaluaciones positivas comparativamente altas.

Entre quienes conocen a cada personaje, Tomás Vodanovic destaca con 48% de evaluación positiva y solo 19% de evaluación negativa. Claudio Orrego alcanza 35% de evaluación positiva y 26% de negativa. Franco Parisi registra 35% positiva y 30% negativa. José Antonio Kast obtiene 35% positiva y

38% negativa. Gabriel Boric presenta 32% positiva y 42% negativa. Jeannette Jara alcanza 32% positiva y 40% negativa.

El caso de Tomás Vodanovic es especialmente relevante porque combina evaluación positiva alta, negatividad baja y un nivel de conocimiento aún con espacio de expansión. Desde una perspectiva electoral, este tipo de perfil puede constituir un activo político relevante en contextos de fragmentación y rechazo a figuras altamente polarizantes.

Kast y Boric, en cambio, muestran perfiles de alta visibilidad y alta polarización. Ambos son ampliamente conocidos, pero arrastran niveles significativos de evaluación negativa. Esto confirma que el sistema político sigue estructurado en parte por liderazgos de alto reconocimiento, pero también de fuerte rechazo.

15. Interpretación general

La Encuesta CEP N°96 muestra un sistema político sometido a una presión multidimensional. La ciudadanía demanda orden, seguridad, eficacia estatal, control migratorio, responsabilidad fiscal y capacidad de acuerdo. Sin embargo, las instituciones representativas cuentan con bajos niveles de confianza, los partidos no logran articular adhesiones significativas y el gobierno enfrenta una aprobación minoritaria.

Desde la teoría de la representación, el principal problema identificado es la desconexión entre demandas sociales y canales institucionales de procesamiento. La ciudadanía tiene prioridades claras, pero no confía en los actores encargados de transformarlas en políticas públicas legítimas y eficaces.

Desde el enfoque de legitimidad democrática, los datos muestran una brecha entre apoyo difuso y apoyo específico. La democracia conserva respaldo como régimen preferible, pero su funcionamiento es evaluado como regular o malo por una mayoría. Esta situación no implica ruptura democrática inmediata, pero sí genera condiciones para la expansión de discursos antipolíticos, tecnocráticos o autoritarios.

Desde la perspectiva de los clivajes políticos, Chile muestra una superposición de fracturas. El eje izquierda-derecha sigue siendo altamente percibido, pero se combina con el conflicto chilenos-inmigrantes, la desigualdad, la inseguridad y la tensión entre Estado protector y Estado burocrático. Esta multidimensionalidad aumenta la volatilidad electoral y dificulta la construcción de coaliciones estables.

Desde el análisis de comportamiento electoral, la baja identificación partidaria, la centralidad de liderazgos personales y la importancia de temas como delincuencia, migración y economía sugieren un electorado altamente disponible, sensible al desempeño y propenso a movimientos de opinión rápidos. La fidelidad partidaria tiene un peso menor que la credibilidad, la imagen de autoridad, la capacidad de gestión y la conexión con demandas concretas.

Conclusiones

La Encuesta CEP abril-mayo 2026 revela una opinión pública crítica, insegura y exigente. El país no aparece dominado por una lógica de entusiasmo gubernamental ni por una adhesión estable a proyectos partidarios. Predomina, más bien, una ciudadanía que demanda resultados concretos y evalúa negativamente a las instituciones políticas tradicionales.

La seguridad pública es el eje ordenador del clima político. La delincuencia constituye la primera prioridad nacional y condiciona percepciones sobre inmigración, justicia, policías, libertades y protesta. Este fenómeno abre espacio para agendas de orden, pero también plantea riesgos para el equilibrio entre seguridad y garantías democráticas.

La democracia chilena conserva respaldo normativo, pero enfrenta una crisis de desempeño. La baja confianza en partidos y Congreso, junto con la evaluación regular o negativa del funcionamiento democrático, expresa una fatiga institucional profunda. No se trata de una ciudadanía abiertamente antidemocrática, pero sí de una ciudadanía menos comprometida con la democracia si esta no produce orden, estabilidad y bienestar.

El gobierno de José Antonio Kast enfrenta un escenario complejo. Su aprobación minoritaria, la desaprobación mayoritaria y la baja confianza en el cumplimiento de sus promesas revelan un déficit de legitimidad inicial. Este déficit se vuelve más relevante porque la ciudadanía demanda acuerdos, mientras una mayoría relativa percibe que el Presidente no tiene suficiente disposición a alcanzarlos con la oposición.

En materia económica y fiscal, la ciudadanía combina preocupación por la deuda, rechazo a la burocracia, demanda de reducción del gasto administrativo y resistencia a recortes generales. Esta combinación sugiere que la viabilidad política de una agenda fiscal dependerá de su capacidad para distinguir entre gasto burocrático, gasto social e inversión pública.

La inmigración se consolida como un clivaje relevante. La mayoría demanda mayor control, asocia inmigración con criminalidad y apoya criterios selectivos. Sin embargo, también respalda derechos para inmigrantes legales, especialmente en educación. Esto indica que la ciudadanía no rechaza toda inmigración, sino que exige legalidad, selectividad y control estatal.

Finalmente, la fragmentación partidaria y la baja identificación política anticipan un ciclo de alta volatilidad electoral. En este contexto, los liderazgos con menor rechazo, mayor capacidad de gestión y posicionamiento transversal pueden adquirir una importancia estratégica superior a la de las estructuras partidarias tradicionales.

El diagnóstico general es claro: Chile enfrenta una crisis de representación en un contexto de demanda intensa por autoridad, eficacia y protección. El desafío del sistema político será responder a esas demandas sin deteriorar la calidad democrática, sin profundizar la polarización y sin convertir la inseguridad en justificación permanente para restringir libertades o debilitar controles institucionales.